

Recomposición de las sociedades rurales en zonas de conflicto armado: el caso de la cuenca del río Caguán

Camilo López Báez
FLACSO.
calobaez@gmail.com

En este trabajo se reflexiona, desde un enfoque multicausal, sobre algunos de los cambios que han experimentado las sociedades locales que se encuentran ubicadas en la cuenca del río Caguán, en el departamento del Caquetá. Se trata de identificar las variables centrales asociadas al conflicto armado que vienen incidiendo en la transformación de las comunidades rurales y en el comportamiento de sus principales tendencias en la perspectiva socioespacial.

En la primera parte se describen las lógicas sobre las cuales se desarrolla el proceso de colonización primaria de la zona durante el siglo XX, contrastando las particularidades de dos espacios: el Alto Caguán y, el Medio y Bajo Caguán.

En la segunda parte, se analiza la incidencia territorial de la llegada y la consolidación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en cuanto a algunos de sus afectaciones en la expansión de la frontera agrícola.

Después el estudio centra su atención en la generalización de los cultivos de uso ilícito, siembra de coca y su transformación en pasta base, y los diversos impactos que estas actividades generan en las comunidades rurales.

Por último, se precisan algunos de los efectos sociales y espaciales que se derivan de la aplicación de ciertas políticas públicas, en particular de las relacionadas con el denominado desarrollo alternativo, la política de lucha contra las drogas y el “Plan Patriota”. La ponencia finaliza con el comentario de algunas conclusiones provisionales derivadas del análisis, orientadas hacia futuras investigaciones para las sociedades rurales.

Palabras clave: sociedades rurales, colonización, conflicto armado, desarrollo rural, cultivos ilícitos.

Recomposition of the rural societies in armed conflict zones: the case of the Caguán river's basin

This paper reflects, from a multicausal approach, on some of the changes that the local societies who live in the basin of the river Caguán have experienced, in the department of Caquetá (Colombia). It is a matter of identifying the central variables which are associated to the armed conflict that has impacted in the transformation of the rural communities and in the behavior of its main tendencies in the social-spatial perspective.

In the first part, the logics upon which the process of primary colonization of the zone during the 20th century developed itself are described, contrasting the particularities of two spaces: the “Alto Caguán” and the “Medio” and “Bajo Caguán”.

In the second part, the territorial incident of the arrival and consolidation of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) is analyzed, in terms of some of its affectations in the expansion of the agricultural border.

Subsequently, the study narrows its attention to the generalization of the cultivations of illicit use, sowing of coke and its transformation in “pasta base”, and the diverse impacts that these activities generate in the rural communities.

Finally, some of the spatial and social effects that are derived from application of certain public politics are described, particularly of those related to the so called alternative development, the politics of fight against the drugs and the “Patriotic Plan”. The presentation finalizes with the comment of some provisional conclusions, products of the analysis, oriented toward future investigations for the rural societies.

Key words: rural societies, colonization, armed conflict, rural development, illicit cultivations.

1. Presentación

En este trabajo se reflexiona, desde un enfoque multicausal, sobre algunos de los cambios que han experimentado las sociedades locales que se encuentran ubicadas en la cuenca del río Caguán, en el departamento de Caquetá. Se trata de identificar las variables centrales asociadas al conflicto armado que vienen incidiendo en la transformación de las comunidades rurales y en el comportamiento de sus tendencias principales en la perspectiva socioespacial.

El referente central que anima estas reflexiones parte de constatar cómo la pluralidad de variables utilizadas en un análisis, constituye una característica central para entender el concepto de espacialidad. Ulrich Oslender (2002), en un artículo sobre la región del Pacífico colombiano, sintetiza a mi manera de ver el enfoque que anima este ejercicio en las siguientes notas:

La geógrafa inglesa Doreen Massey (1993) constata que está muy de moda en estos días, refiriéndose a un gran número de científicos sociales que articulan sus análisis en términos espaciales. Sin embargo, lo que Massey y otros deploran es la carencia de un entendimiento analítico del *concepto* de espacio: las metáforas geográficas de las políticas contemporáneas deben contemplar concepciones de espacio que reconocen lugar, posición, ubicación, etc., como creado, como producidos (Bondi, 1993). Más aún no se trata solo de reconocer la forma construida de dichos conceptos sino de mostrar *cómo* han sido construidos y bajo qué estructuras políticas y relaciones de poder/saber

En cierta forma, Massey parece evocar aquí las representaciones geométricas de la geografía de tiempo de Hägerstrand (1973). Sin embargo, no se limitan las interrelaciones de espacio-tiempo a un rígido fisicalismo gráfico de interacciones rutinarias de actores sociales en un marco conocido de lugares y caminos posibles de espacio-tiempo. Lo que importa aquí es la condición fluida y dinámica de esta relación y las múltiples formas en que el espacio y el tiempo están inscritos en la conducta de la vida social.

Según estas claves, que de entrada nos sacan de los debates ubicados preferentemente sobre la dominación político-militar de los territorios, se intentará dar cuenta de algunas transformaciones socioespaciales para unas colectividades en plena consolidación, y en cuya historia se entrecruzan diversos fenómenos.

2. Antecedentes y primera colonización¹

La colonización moderna del piedemonte amazónico se divide en dos grandes fases. La primera se desarrolla, grosso modo, durante la primera mitad del siglo XX, caracterizada por una migración paulatina y poco numerosa y por una lenta expansión de la ocupación territorial, la cual se efectúa principalmente a partir de las áreas adyacentes a los centros urbanos más antiguos de fundación, como San Vicente del Caguán (1900), Puerto Rico (1882), Florencia (1902), Belén de los Andaquíes (1917) y Guacamayas (1916).

La segunda fase, que se desenvuelve en la segunda mitad del siglo XX, se distingue por una migración más intensa y multitudinaria y por una rápida expansión territorial que arroja la fundación de numerosos poblados.

El tejido social que han consolidado los grupos humanos que habitan el área de estudio constituye un mosaico complejo donde se entrecruzan algunos rasgos de los pueblos indígenas, con elementos introducidos por los colonos, originarios de los valles interandinos y montañas interiores; y formas propias de los procesos de apertura de la frontera agrícola.

Desde sus inicios, la sociedad regional ha experimentado en su proceso de construcción una ausencia del Estado, fenómeno que refuerza la iniciativa privada desligada de las políticas públicas. En otras palabras, la expansión de la frontera agrícola no ha sido acompañada por la expansión del Estado como sistema de relaciones sociopolíticas que exprese propósitos nacionales.

Al igual que en muchas otras sociedades, el crecimiento de la población ha impulsado el desbordamiento de los límites iniciales de su espacio y, de la misma manera, la apropiación del suelo ha sido un instrumento que ha facilitado la ampliación de las fronteras agrarias gracias a la mano de obra expulsada en este proceso (Binswerner *et ál.*: 1993)

Las primeras agrupaciones presentan elementos sociales asociados a lo tradicional-rural: familias extensas, núcleos patriarcales, relaciones de clientelismo y legitimidad de los arreglos informales; elementos traídos y adaptados desde las sociedades de origen de los migrantes.

Si bien algunos grupos de colonos traen patrones de relación muy individuales e instrumentales, las necesidades que emergen al enfrentarse a un territorio sin infraestructura de comunicaciones ni de servicios, obligan a los colonos a poner en práctica el sentido gregario y la cooperación como mecanismos de supervivencia individual y colectiva.

Desde el punto de vista territorial, durante la primera mitad del siglo XX inicialmente se ocupa la zona del piedemonte por parte de migrantes originarios de la región de Huila y Tolima cercana a la cordillera Oriental, quienes consolidan los municipios del norte del Caquetá (Florencia, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán),

¹ Tomado de: López Báez (2004).

y después de la década de los años cincuenta, se activan frentes de colonización hacia el sur del departamento.

En la zona de Cartagena del Chairá se consolidan dos frentes de colonización que penetran desde el norte por el curso del río Guayas, desde Puerto Rico y el río Caguán con base en San Vicente. Los dos movimientos poblacionales realizan una colonización lineal a través de los ríos, estableciendo poblados intermedios, como Rionegro, por el río Guayas, y Tres Esquinas y Puerto Betania, por el río Caguán. Además, se tienen testimonios de algunos descendientes de antiguos reclusos que, después de salir de la colonia penal de Aracuaara, subien por el río Caquetá y se establecen en el Medio y el bajo Caguán, así como de grupos familiares provenientes de La Tagua (Putumayo)

En términos socioeconómicos antes de 1976, Jaramillo establece para la zona dos períodos bien diferenciados. El primero, la explotación predatoria del territorio selvático, caracterizada por la extracción de caucho negro y juansoco, la venta de pieles y la explotación de maderas, actividades realizadas primero por grupos itinerantes y luego dinamizada con conjuntos de familias de colonos que inician su asentamiento en las décadas de los años cuarenta y cincuenta.

El segundo período: la colonización estable semiconsuntiva, animada por grupos familiares orientados por la búsqueda de tierra para poseer y explotar de modo estable. Allí se introduce pan coger y cultivos de mediano plazo que garanticen la subsistencia. Después se inicia el desmonte de selva a fin de iniciar las explotaciones porcícolas y ganaderas en pequeña y mediana escalas. (Jaramillo: 1989).

Aunque el campesino busca escapar a zonas donde no reine el dominio de los terratenientes y la renta absoluta de la tierra no consuma todos los ingresos agropecuarios, con el paso del tiempo, cuando las economías y las sociedades se estabilizan, este fenómeno tiende a repetirse a través de la compra de mejoras y posesiones relativamente antiguas.

Una vez superadas las primeras décadas de colonización, donde las diferencias entre pares no son tan marcadas, estas sociedades transitan por caminos de estabilización y estratificación social y se avizoran sectores definidos: empresarios, latifundistas, comerciantes, campesinos, empleados, jornaleros, entre otros.

Se trata de un proceso gradual en el cual el pasado reciente se erige como un referente fundacional de los sectores y las colectividades sociales. Con excepción de las ciudades de Florencia y Mocoa, las relaciones entre grupos humanos rurales y urbanos son casi inexistentes, pues los intereses y la consolidación del territorio se encuentran vinculados con fuerza a los ámbitos rurales.

Lo anterior explica la legitimidad, el reconocimiento y la recurrencia a las formas organizativas rurales, como los comités de colonización, las juntas de acción comunal, las asociaciones de agricultores, los fondos ganaderos y las agremiaciones de productores, entre otras.

Para el caso del Medio y el Bajo Caguán, se destacan por su liderazgo y por su capacidad de negociación con actores e instancias tanto regionales como nacionales, los comités de colonización y la Asociación de Juntas de Acción Comunal.

Sociedades locales de colonos muy heterogéneas en su composición interna: campesinos excluidos, jornaleros, cosecheros, grupos humanos urbanos desempleados, pequeños inversionistas, que se articulan de manera diferenciada a un proceso de migración y expansión de la frontera agrícola, donde adquiere particular peso la antigüedad.

Como lo anota González Arias (1988, p. 175), desde el punto de vista de la organización de la población migrante, la colonización de la zona tiene un comportamiento continuo con el tipo de doblamiento “lineal”, y de manera simultánea empiezan a configurarse formas de poblamiento de tipo “espacial”, que, aunque disperso, conectan los distintos valles interfluviales y los centros poblados con frentes de colonización.

3. Incidencia territorial de la llegada y la consolidación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): algunos de sus impactos en la expansión de la frontera agrícola

Las corrientes migratorias, primero extractivas de materias primas y luego de praderización para el establecimiento del modelo de ganadería extensiva, de origen andino con proyección al espacio amazónico, se acompañan en forma tardía de un fenómeno de características particulares.

A mediados de la década de los años sesenta del siglo XX, algunos movimientos sociales de origen agrario tributarios de la denominada violencia bipartidista, empiezan a ser percibidos por el gobierno nacional como grupos amenazadores y son reprimidas con operativos militares en un esfuerzo por “pacificar” al país.

Como lo anota Ramírez Tobón (1981)²:

Las regiones de Marquetalia, Guayabero, Villarrica, Ariari, El Pato, fueron hoscamente calificadas como “repúblicas independientes” en vista de su difícil extraterritorialidad donde la institucionalidad del sistema era marginal, si no inexistente. La ofensiva del establecimiento contra estos reductos que trataban el nuevo ordenamiento político bipartidista no se hizo esperar, y el Estado irrumpió violentamente en las recién domesticadas fronteras agrícolas empujando a los campesinos hacia la azarosa búsqueda de la supervivencia. De nuevo, el hacha y el fusil acompañaron el éxodo de familias enteras tras la irrenunciable conquista de la propiedad.

² Citado en: Jaramillo, Mora y Cubides (1986, p. 55).

La mirada de Ramírez Tobón, sumada a la de otros autores, como Alfredo Molano Bravo, acuñan la noción de la “colonización armada”, para denotar la tutela ejercida por organizaciones armadas sobre los grupos de campesinos obligados a migrar hacia las zonas de colonización.

Existen registros históricos orales que identifican a un grupo de familias asentadas en las estribaciones del río Pato, zona del Alto Caguán, quienes por efecto de la represión militar durante los primeros años de la década de los años sesenta, inician un proceso de migración hacia el Medio Caguán, estas personas se asimilan a las lógicas de la colonización precedentes en la región, con el estigma de ser auxiliares de la guerrilla de las FARC.

Al parecer, algunos núcleos de “autodefensas de masas”, organizaciones embrionarias de las FARC, se consolidan en la zona de la cordillera Oriental entre los departamentos de Huila y Caquetá, con un radio de acción en los ríos Pato y Guayabero. Este proceso es registrado por González, de la siguiente manera:

La presencia de las guerrillas de las FARC en el departamento data prácticamente desde el mismo surgimiento de éstas. De hecho, uno de los frentes históricos de las FARC, el Tercer Frente, se formó y se consolidó en el área de operaciones comprendida entre el Huila y el Caquetá. Las FARC protagonizaron en el Caquetá, en 1974, con la toma del municipio de Puerto Rico, Caquetá, la primera toma de un municipio colombiano por parte de la insurgencia. Desde entonces, las FARC se extendieron desde la cuenca del Alto Caguán, por el Medio y el Bajo Caguán, y el Alto y el Medio Caquetá. Así como por todo el piedemonte cordillerano caqueteño (González Arias: 1988, p. 233).

Si bien lo anterior es cierto, en la concepción de guerra de guerrillas, las FARC no incluyen en sus tácticas y estrategias de lucha político-militar animar y dirigir la colonización en curso; parte de sus prácticas inciden de alguna manera en el proceso de expansión de la frontera agrícola, así como en la consolidación de los nacientes grupos sociales en la zona.

Con contadas y esporádicas excepciones en la región, el proceso de colonización ocurre con una notable ausencia del Estado, fenómeno que genera las condiciones óptimas para que las FARC experimenten diversas formas de control social, que en ocasiones suplantando y complementan la debilidad estatal.

Inicialmente, en cuanto a la interacción con los grupos sociales, se continúa con el esquema de las “autodefensas campesinas”, organizaciones que no dependen en forma orgánica de las FARC, pero que en su nombre ejercen el control de autoridad básico en las colectividades, a la manera de una “policía de vereda”, frente a una autorregulación de las comunidades que con facilidad se desborda en los espacios cotidianos, en especial cuando se introducen los cultivos de uso ilícito.

Esta forma de autoridad deriva en los “comités de acción social”, cuerpos integrados por civiles, que cuentan con el respaldo de las FARC, los cuales no logran consolidarse, pues su creación coincide con la firma de los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional en Uribe (Meta)³.

Posterior al fracaso de los acuerdos con el gobierno nacional, al aniquilamiento de la Unión Patriótica y al cambio de estrategia de las FARC, quienes deciden convertirse en un ejército, se crean las denominadas “milicias”, organizaciones que, además de ejercer un control social en las comunidades, se articulan a las tácticas militares ideadas para asumir la dinámica del conflicto.

El control social ejercido por las FARC en sus diversas formas, hasta finales de la década de los años setenta, no modifica de manera sustancial las lógicas de la colonización preexistentes. Su incidencia radica en inhibir o permitir los flujos de población y la fundación de nuevos predios rurales, en concordancia con sus intereses militares, que en ese momento histórico se relacionan con el fortalecimiento de un ejército que pueda a mediano plazo pasar de la operación de ataque esporádico a una ofensiva, según el esquema de la guerra móvil.

Quizás uno de los fenómenos que poco se comprenden en la actualidad lo constituye el complejo proceso de construcción de las intersubjetividades entre los integrantes de las FARC, algunos de ellos originarios de familias de colonos, y las comunidades rurales que empiezan a establecerse en la zona, en medio de un contexto en el cual las nociones de construcción socioespacial del territorio se consolidan sin el principio orientador y regulador del Estado, tema sobre el cual valdría la pena indagar en oportunidades futuras.

Una vez se introducen y se generalizan los cultivos de uso ilícito en la zona, a mediados de la década de los años setenta, en particular los plantíos de coca, el papel de las FARC se modifica coadyuvando, junto a otras variables, a modificar los procesos de colonización.

Cuando las FARC pasan de cobrar el tradicional “gramaje”, impuesto del 10% a cada kilo de hoja de coca transformado en pasta base, a controlar el circuito intrarregional de comercialización de la pasta base, su incidencia sobre la expansión de la frontera agrícola es notable, al menos en tres aspectos:

1. A las aspiraciones de las organizaciones de colonos de gestionar un proyecto de desarrollo subregional, que en la época del gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas se denomina “El modelo Caguán”, del cual son copartícipes en su formulación, se superpone el interés de las FARC por tener acceso a los excedentes de producción de la siembra de coca, la transformación en pasta base y su comercialización a gran escala.

2. La tendencia de la colonización “espacial”, es decir, la que va desde el curso del río hacia las zonas adyacentes, se modifica de acuerdo con las necesidades logísticas y

³ Este proceso es comentado con detalle en Jaramillo, Mora y Cubides (1986, pp. 245, 255).

militares de las FARC, alterando el proceso de interconexión social y espacial entre los poblados y los caseríos.

3. Los asentamientos humanos de la zona, algunos resultado de treinta años de formación, se alteran con un doble fenómeno de recomposición territorial desde arriba. De una parte, las FARC, atendiendo a su táctica militar, deciden interconectar a su manera la zona del Alto Caguán con las del Medio y el Bajo Caguán, a través de un sistema carretable de vías terciarias. Estas obras se realizan en sentido paralelo al curso del río Caguán, transformando los poblados ya consolidados y activando la formación de nuevos asentamientos sin los mínimos referentes de planeación o impactos sobre el entorno. Por otra parte, de manera unilateral, cambian el polo de desarrollo del Medio Caguán. Esto significa que el poblado Remolino del Caguán, escenario de gran dinámica organizativa y económica, pierde su centralidad; y se empieza a fortalecerse en norte el caserío Peñas Coloradas, lugar donde se concentra la comercialización de pasta base y la interconexión de la red de vías terciarias hacia los cuatro puntos cardinales de la región.

Estos fenómenos, sumados a la implementación de las políticas públicas, modifican notablemente el proceso de colonización en la zona.

4. Efectos de los cultivos de uso ilícito en las comunidades rurales (López Báez, 2004)

La producción y la transformación comercial de sustancias narcóticas y psicoactivas son actividades históricas consideradas por las sociedades actuales como ilegales y proscritas. Este fenómeno se ha exacerbado con el fortalecimiento de discursos prohibicionistas originados en los países desarrollados, cuyos argumentos jurídicos, médicos, económicos y políticos se han convertido en hegemónicos.

Desde el ámbito económico, estas sustancias se comportan al igual que otro producto agrícola tradicional, la diferencia se la imprime su carácter ilegal, hecho que altera de manera significativa su tratamiento y su percepción, tanto en las sociedades consumidoras como productoras.

Para el caso de la producción, la transformación, el mercadeo y el consumo de coca con fines comerciales, es una actividad integrada de modo vertical a un circuito internacional donde los pequeños productores (de una a cinco hectáreas) ocupan un lugar específico de la cadena y obtienen el menor valor agregado. Este valor aumenta de manera geométrica en cada uno de los eslabones subsiguientes al del pequeño productor.

Como casi todos los productos articulados al mercado mundial, la demanda es la que imprime la dinámica al sistema, esto significa que en la medida en que existan consumidores de estas sustancias, correlativamente se mantendrán productores que abastezcan estos mercados.

Desde el punto de vista productivo, se trata de una actividad agroindustrial y química que implica la utilización de diversas tecnologías, convirtiendo al campesino en forma simultánea en productor, transformador y comercializador en pequeña escala, activando las posibilidades de multiocupación de la mano de obra familiar. Vincula múltiples actividades de la economía tanto legal como ilegal; de hecho, un pequeño productor puede coexistir con el monocultivo de la coca en medio de su sistema productivo tradicional. Así mismo, gran parte del conjunto de insumos utilizados para el manejo agronómico del cultivo de coca y su transformación en pasta base se consiguen en los almacenes legales que surten el mercado de agroquímicos. De igual manera, otros artículos que soportan esta actividad productiva, como armas, municiones, equipos de comunicación, insumos restringidos, algunos vehículos, entre otros, se adquieren en los mercados paralelos.

Hasta hace pocos años, el sistema financiero, los mecanismos de compra y venta de finca raíz, el establecimiento de empresas y comercios, entre otros negocios, ofrecían ventajas abiertas para la legalización de los activos provenientes de estas actividades ilícitas.

Como ocurre en casi todas las actividades ilegales, la violencia y el uso de la fuerza constituyen los mecanismos privilegiados para ejercer el control de los actores y definir las reglas del juego, así articula y cataliza múltiples formas delincuenciales. Este fenómeno permite la interacción de grupos de contrabandistas, “oficinas” de sicarios, mafiosos, autoridades corruptas, reducidos, organizaciones contraestatales y paraestatales, y otros.

Por la lógica interna de esta actividad se presenta una tendencia evidente hacia la especialización del trabajo, separando cultivadores de coca de transformadores de pasta base, vendedores de insumos de refinadores de clorhidrato de cocaína, comercializadores a gran escala, transportadores, distribuidores al detal y consumidores. La producción de coca y su transformación en pasta base en pequeña escala ofrece ventajas comparativas al campesino frente a otros productos de la finca: adaptabilidad de las variedades a suelos heterogéneos; manejo agronómico de los cultivos relativamente sencillo; ciclo productivo corto, que rinde dos a tres cosechas al año; siembra, recolección y transformación manejables por la unidad familiar; uso de tecnologías blandas; mercancía final de bajo volumen transportable fácilmente; mercado asegurado de compra rápida y en efectivo; precios sin competencia con relación a otros productos de la finca. A partir de la mitad de la década de los años setenta del siglo XX, con la introducción de los cultivos de coca en el Medio y el Bajo Caguán, se genera un hito significativo en los procesos de colonización de la zona que modifica de manera radical las lógicas de ocupación territorial y produce lo que Jaramillo, González y Vargas denominan una verdadera “revolución demográfica”, de fuertes impactos en todas las dimensiones de la vida cotidiana. A continuación, se describen en forma preliminar algunos cambios sociales de este fenómeno en los grupos humanos de la zona.

Irrupción de una nueva corriente migratoria que combina nuevos colonos y población de campesinos y urbanos con el objeto de realizar actividades tanto agrícolas como no agrícolas asociados en su conjunto a los cultivos de coca. La llegada de esta nueva población con intereses y motivaciones particulares duplica en pocos años el número de habitantes en la zona.

Sustitución de la tierra como referente identitario por la acumulación rápida de capital, lo cual genera un conflicto de intereses entre colonos antiguos, quienes llegaron a “civilizar” la selva, colonos nuevos, que tumban bosque para la implementación exclusiva de cultivos de coca, y un grupo heterogéneo de trabajadores no agrícolas que dependen de la economía cocalera. Estos antagonismos producen diversas tensiones, en especial en las reivindicaciones de las organizaciones comunitarias frente al Estado y en las formas internas de control social.

Debilitamiento de las prácticas solidarias y de cooperación, que encuentren en los procesos clásicos de colonización un espacio central manifiesto en la activación de los sentidos gregarios en la población. Paralelamente, se experimenta el surgimiento de evidentes relaciones de medios con arreglo a fines, en los cuales el lucro individual coexiste y en ocasiones se sobrepone al bien general.

Modificaciones en el comportamiento de las formas asociativas, las motivaciones y los intereses se regulan por la interacción entre fenómenos internos y externos, presentando asimetrías y ciclos de altibajos en las organizaciones. Así, durante las negociaciones de paz en la administración del presidente Belisario Betancur, se fortalecen los comités de colonización y bajan de perfil las juntas de acción comunal, para caer luego en la frustración ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Después, en 1996, con ocasión de las marchas campesinas, la Asociación de Juntas de Acción Comunal cumple un papel trascendental en la movilización social, pero terminan diezmadas por acciones de fuerza dirigidas hacia sus líderes.

Al finalizar la década de los años noventa, se genera un renacer de las organizaciones comunitarias como reacción a las políticas públicas de lucha contra las drogas, en particular las fumigaciones aéreas con glifosato y la consolidación de propuestas desarrollo regional, según el modelo de agrupación por núcleos, 13 en total, que articulan tres sectores geográficos que a su vez retoman una asociación de juntas, integrada por las 167 juntas de acción comunal que se encuentran reconocidas legalmente en el municipio de Cartagena del Chairá.

Este modelo de agrupación por núcleos comunitarios al parecer ha sido percibido de manera equivocada por algunas instituciones gubernamentales y militares como una estrategia de reordenamiento social orientado por grupos al margen de la ley, con los graves efectos de estigmatización y aumento en la vulnerabilidad de los dignatarios y los asociados que ello conlleva.

La grave crisis social y económica experimentada en la zona por la economía cocalera a finales de la década de los años noventa y el incremento en el conflicto armado en la región, vienen generando un replanteamiento de este modelo hacia la búsqueda de mayor fortaleza y mayor autonomía en las organizaciones comunitarias, cuyos efectos están por verse.

Desde el punto de vista colectivo, se amplían los mecanismos de socialización exógenos, accediendo a tecnologías de información y telecomunicaciones, que en su mayor parte se utiliza para el entretenimiento. Se populariza en los caseríos la tenencia de antenas parabólicas, radiotéléfonos, y en algunos casos, equipos de cómputo.

Coexisten con mayor visibilidad formas tradicionales y contemporáneas asistiendo a un complejo proceso de hibridación en los horizontes simbólicos de los pobladores: interactuando referentes campesino-urbano-tradicional-moderno, sagrado-pagano-autoabastecimiento-consumismo, cuyas particularidades como fenómeno sociocultural están por estudiarse.

Si bien los espacios sociales de referencia tradicionales, como la familia, la escuela, la fonda, la vereda y la Iglesia, continúan operando, con el auge de la coca adquieren centralidad otros escenarios. Ahora los bares, las discotecas y los mercados se convierten en lugares privilegiados para el encuentro y la interacción social.

Como puede constatarse en procesos similares de colonización asociados a bonanzas económicas (hidrocarburos, minería, apertura de vías, macroproyectos de infraestructura), los espacios sociales locales de referencia se transforman animando nuevos patrones de comportamiento colectivo.

Así mismo, aparecen nuevas diferenciaciones y denominaciones en los grupos sociales: patrones (dueños de los cultivos de coca), “traquetos” (comercializadores de pasta base de coca en mediana escala), “raspachines” (recolectores de hoja de coca), “gatilleros” (integrantes de grupos que prestan seguridad a los dueños de cultivos y comercializadores), “chichipatos” (comercializadores de pasta base de coca en pequeña escala), entre otros, que dejan ver la dinámica en el ingreso, la articulación y el posicionamiento funcional de diversos grupos humanos a los procesos de producción y transformación de los cultivos de uso ilícito.

En el sistema productivo los campesinos relegan de modo gradual las actividades agropecuarias que garantizan su autoconsumo, para asumir una especialización entorno del monocultivo y la transformación de la coca, lo cual genera gran dependencia de insumos externos, y la introducción de nuevas tecnologías que incrementan las ineficiencias ambientales.

En la mentalidad del colono se produce una suerte de cambio sustancial respecto de sus relaciones con el entorno próximo, que incluye actitudes, valores, expectativas y formas de comportamiento. En lenguaje coloquial, cuando una familia campesina dirige toda su

atención al cultivo y la transformación de la coca se dice que está “encocado”, esto significa que su vida cotidiana gira de manera autorreferente en torno de esta actividad.

Incluso prácticas sociales como los ciclos en la educación de la niñez, la celebración de fechas significativas para la familia y el cumplimiento de acuerdos comunitarios se postergan, pues toda la atención y las energías disponibles están centradas en el cultivo y transformación de la coca.

Esto implica, entre otros hechos, la utilización intensiva de mano de obra familiar no remunerada, sobrecarga laboral en las mujeres y exposición de niñas y niños a labores de mucho riesgo, con grandes peligros para la salud física y mental de las personas.

Se amplían los circuitos comerciales presentándose variaciones en las pautas de gasto y consumo asociados a necesidades no básicas. Aquí cambian los hábitos alimenticios y nutricionales en detrimento de la salud, en especial de niñas, niños y mujeres gestantes y lactantes, y aumenta la morbilidad-mortalidad por enfermedades que pueden prevenirse por completo.

En relación con el perfil de los grupos parentales, se identifica una fragmentación de las relaciones familiares, incremento en el maltrato intrafamiliar, así como del madresolterismo, el padresolterismo y el abandono de la prole. Niñas, niños y jóvenes aumentan su vulnerabilidad y desmejoran las condiciones básicas para su desarrollo integral.

Aumenta la desescolarización, pues niñas, niños y jóvenes se articulan de manera temprana a los espacios laborales propios de la coca, los cuales están sujetos a los abusos sexuales, a la prostitución, a las adicciones a sustancias tóxicas (alcohol, tabaquismo, bazuco) y a las presiones de los grupos armados para su reclutamiento.

En particular, existe una profundización en las discriminaciones y el cierre de oportunidades para las mujeres, pues, por una parte, se consolida el acceso a los mecanismos de poder por medios patriarcales, y, por otra, distintas formas de violencia y subvaloración (verbal, física y simbólica) tienen como objetivo específico a los grupos de población femenina.

En el ámbito social, se asiste a la construcción de discursos e imaginarios desde ámbitos cotidianos en los cuales se combinan indistintamente referentes de legalidad y de ilegalidad. Así, se tiene la visión de un Estado ausente, sin gobernabilidad y represor, pero a la vez se realizan esfuerzos organizativos para mediar de manera legítima en la gestión de necesidades y demandas comunitarias.

Existen percepciones externas de los pequeños productores como ilegales, delincuentes judicializables y sujetos al margen de la ley. En forma paralela, internamente se ha consolidado un discurso autorreferente que argumenta y justifica con razones, económicas, políticas, sociales y culturales su condición de actores marginados y excluidos que, ante el fracaso del modelo de producción agropecuaria, se ven obligados a vivir de los cultivos de uso ilícito por razones de supervivencia.

Los imaginarios de futuro en la población joven se encuentran asociados a ser un “patrón”, dueño de una plantación, acumulando grandes cantidades de dinero, poder invertir en otras zonas, en especial urbanas, obtener dinero para comprar y consumir sin límites, eliminar al contrario y consolidar controles y poderes microterritoriales. Así, el dinero, el poder, el consumo y la fuerza constituyen referentes para las nuevas generaciones.

Como puede inferirse, la introducción de los cultivos de uso ilícito cambian de manera significativa las lógicas del proceso de colonización, pues al objetivo primario del acceso a la tierra, la consolidación de una familia alrededor del predio y la fundación de una nueva comunidad, se superponen los intereses de un negocio internacional, animado por la crisis del modelo agrario nacional originado en la liberalización de los mercados sin las protecciones básicas, y un creciente conflicto interno que desplaza a un gran número de personas tanto de las zonas urbanas como de las rurales.

5. Incidencias sociales y espaciales de las políticas públicas en la región

a. Colonización empresarial

El Estado permitió de modo eventual mediante concesiones y compañías una colonización extractiva y de hacienda que tuvo sus antecedentes en la zona del Alto Caguán a finales del siglo XIX. En este sentido, relata Jaramillo *et ál.*:

Alrededor de la concesión Cano-Cuello, en el noroccidente de Caquetá, sobre el río Guayas, se crea desde finales del siglo XX el municipio de Puerto Rico (1884), que registra el aflujo de emigrantes de la guerra de los Mil Días, quienes acceden a este poblado, por el Huila. En la misma zona, esta vez en la parte alta del río Caguán, en terrenos de la concesión Perdomo, se funda San Vicente del Caguán (1896), como sitio de paso de los caucheros, en su proceso de comercialización de látex” (Jaramillo, Mora y Cubiles: 1986, p. 8)

Después, “en 1912 se creó en Neiva la Sociedad Colonizadora del Caquetá, sociedad que ofreció cabezas de ganado a los antiguos caucheros a cambio de la preparación de potreros, con lo cual se lograron establecer algunos hatos alrededor de San Vicente y hasta la propia zonas del Yari” (Artunduaga Bermeo: 1984, p. 185).

Así mismo, a partir de 1935 se instala la Hacienda Larandia, desarrollada por la familia Lara, proveniente del Huila.

La superficie de esta hacienda –en su momento, una de las más grandes explotaciones de América Latina– asciende a las 40.000 hectáreas cuenta con algo más de 50.000 reses exportadas al Perú y comercializadas al interior del país. Larandia posee puertos, puentes, muelles y aeropuerto y algo más de 40

kilómetros de vías carretables, donde se cobraba peaje a los colonos (Artunduaga Bermeo: 1984, p. 11).

En la jurisdicción de San Vicente del Caguán, hacia los llanos del Yarí, se establece el poblado El Recreo, lugar donde “al finalizar la década de los años cincuenta, La Compañía de Leonidas Lara e Hijos reactiva el gran proyecto ganadero del Yarí, construye una pista de aterrizaje y convierte El Recreo, junto con la hacienda Larandia, también propiedad de la Compañía Lara, en uno de los emporios ganaderos más importantes del país” (González Arias: 1988, p. 202)

b. La colonización dirigida

Hacia mediados del siglo XX el Estado colombiano establece una política de colonización para la zona, que Ramírez Montenegro (1994) sintetiza de la siguiente manera:

1. Colonización dirigida, con programas en el Retorno (Guaviare) a fines de los años sesenta, y en La Mono, Maguaré y Valparaíso (Caquetá) desde fines de los años de 1950.

2. Apoyo a la colonización: los proyectos Caquetá I y II, cofinanciados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que constituyen una experiencia “modelo” a replicar en otras zonas de trópico húmedo; y el proyecto Putumayo I, financiado con recursos nacionales. El apoyo se dirige a la titulación de tierras, orientación y créditos para la producción, la construcción de infraestructura vial y de atención social, como ejes principales de la acción.

Este proceso de orientación pública se soporta en varias entidades dependientes del Ministerio de Agricultura, como el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema) y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.

Al respecto, González comenta:

El Incora implementó en el Caquetá uno de los proyectos de colonización más ambiciosos del país, aunque sus efectos poco se hicieron sentir en cuanto a la orientación de la colonización que se proponía. De hecho, tanto la colonización dirigida por la Caja Agraria como la colonización orientada por el Incora, se desarrollaron como verdaderos enclaves dentro de la dinámica de la colonización espontánea. En consecuencia, como sucedió con el proyecto desarrollado por la Caja Agraria desde 1956, los esfuerzos del Incora no pudieron sobreponerse a la lógica de la expansión de la frontera agrícola basada en un modelo de desarrollo excluyente. Para finales de la década del setenta el programa de colonización del INCORA se había marchitado en medio de sistemáticos fracasos (González Arias: 1988, p. 176).

El fenómeno anterior es corroborado por Ramírez Montenegro (1994, p. 604) cuando afirma:

Esta primera etapa de colonización entró en crisis en los años de 1970: el escaso y equivocado apoyo gubernamental a la colonización condujeron al paro campesino del Caquetá (1972); las continuas fallas institucionales en la compra de las cosechas de arroz y maíz generaron el descontento social en el Guaviare (1976); la disminución de la explotación petrolera y la fuerte represión a las invasiones urbanas contribuyeron al trágico paro cívico realizado en Puerto Asís (1974).

Si bien esta política pública tardía no cumple de modo cabal con sus objetivos de dirigir el proceso de expansión de la frontera agrícola, sí genera un efecto inesperado de la acción, que se concreta en animar de manera indirecta importantes flujos de población hacia el Medio y el Bajo Caguán, que después se convertirán en una base importante de mano de obra que se articulará a las actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito.

En tal sentido, González corrobora la tendencia de la siguiente manera:

Por otra parte, y como efecto de los programas de colonización dirigida y orientada desarrollados por la Caja Agraria y el Incora, respectivamente, con la consiguiente densificación de la colonización en el área central comprendida entre Florencia y El Doncello, se intensifica el proceso de colonización espontánea en dirección noroccidental hacia el valle interfluvial de los ríos Guayas y Caguán en su parte media.

De hecho, del frente de colonización dirigida localizado en Maguaré-Puerto Manrique se originaron significativos movimientos poblacionales hacia los nuevos frentes de colonización espontánea, de los cuales surgieron nuevos núcleos de población, como Río Negro, sobre la margen derecha del Guayas, Lusitania, sobre el carretable que se desprende de la carretera central, Puerto Rico, San Vicente y Tres Esquinas, punto terminal del mencionado carretable (González Arias: 1988, p. 192).

c. Plan de Desarrollo del Medio y el Bajo Caguán y Sunciya y Plan de Acción Inmediata para el Medio y el Bajo Caguán

En el marco de la política de paz del gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), que tenía por objeto iniciar procesos de acercamiento y negociación con los diversos grupos armados, se pacta con las FARC en 1984 un cese el fuego, hecho que, aunado a otros factores regionales, generan un espacio privilegiado para pensar en el desarrollo regional.

Resulta pertinente recordar que para finales de la década de los años ochenta en la zona del Medio y el Bajo Caguán, se experimenta la primera gran “bonanza cocalera”, que dinamiza las corrientes migratorias, la creación de poblados y las actividades económicas, tanto legales como ilegales. Este pico inicia su descenso vertiginoso a partir de 1982, y deja la zona sumida en una crisis económica y social, fenómeno que después se repetirá con las sucesivas alzas y bajas en los precios de la pasta base de coca.

En el contexto anterior, Mora comenta el momento bajo el cual se concibe el proyecto regional para el Bajo y el Medio Caguán:

Los representantes de 29 juntas de acción comunal, el Comité de Colonización, la Asociación de Juntas Comunales, y los representantes políticos de los frentes XIV y XV de las FARC elaboraron, con la asesoría del Incora en marzo de 1985, un plan de desarrollo de la región que, hasta ahora, es la presentación más coherente y comprensiva de las reivindicaciones económicas de la comunidad para viabilizar la rehabilitación de la región y, al mismo tiempo, transformar la base productiva de la colonización (Jaramillo, Mora y Cubiles: 1986, p. 170).

Este particular ejercicio de planeación implica la creación de un Comité de Investigación y Transferencia Tecnológica⁴, encargado de promover lo que más tarde se denomina el “modelo Caguán”, y la gestión de una iniciativa comunitaria ante el Inderena para obtener el levantamiento de la reserva forestal de una área de 360.000 hectáreas que cubren la zona adyacente a las riberas del Medio y el Bajo Caguán.

En palabras de Ramírez Montenegro:

El plan especial entró en crisis por diversos factores: paulatina ausencia de las instituciones estatales por la incapacidad para apoyar y sostener los proyectos respectivos; crisis del mercado cocalero por baja de precios y el encarecimiento de los insumos desde 1986; divisiones internas de las organizaciones comunitarias acentuada por la acción lenta o la inacción del Estado en lo ya convenido; fuertes cuestionamientos de diversos sectores políticos (en especial del liberalismo regional), militares, eclesiásticos y de los medios de comunicación a los procesos que se daban en el Caguán (Ramírez Montenegro: 1994, p. 615).

En el intervalo de tiempo ocurrido entre el cierre de la administración del presidente Betancur y el inicio de la gestión de Virgilio Barco Vargas, se ubican algunos hechos que trasformarán de manera definitiva la iniciativa regional. Así lo referencia Jaramillo:

⁴ Comité integrado por los representantes de las entidades siguientes: Incora, Caja Agraria, Universidad Nacional, Universidad de la Amazonia, Inderena, SENA, ICBF, Colciencias, ICA, Idema y Departamento Nacional de Planeación.

Finalmente, otro factor que tuvo un impacto demoledor en el proceso lo constituyó el deterioro de la situación política nacional que se inicia con la toma armada del Palacio de Justicia en Bogotá por un comando urbano del M-19, el 6 de noviembre, y la contratoma a sangre y fuego por parte del ejército, en la cual murieron cerca de 100 personas, entre ellas ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia...

Desde entonces, cesan las visitas masivas de funcionarios y se paraliza la campaña organizativa de la comunidad en torno del plan de trabajo. A ello contribuye la virtual interinidad en que entra la administración pública, luego del triunfo electoral del liberal Virgilio Barco, y las expectativas acerca de la política de paz del nuevo gobierno, que ya desde entonces se anuncia:

Mano tendida y pulso firme... En el gobierno de Barco, con la creación de la Consejería Presidencial de Integración Popular, se replantea la acción del Estado y se desautoriza la participación de cualquier funcionario en diálogos con la guerrilla. Estas intervenciones se canalizarían en adelante a través de los consejos departamentales y municipales de rehabilitación (Jaramillo, Mora y Cubiles: 1986, pp. 213-215).

A mediados de 1988, las Fuerzas Militares realizan fuerte presencia en la zona, que coincide con la segunda gran crisis en los precios de la pasta base de coca. Estos eventos generan protestas y pronunciamientos ante el Estado, desde donde se reacciona a través de un plan de intervención.

Mora, lo registra así:

Con el propósito de responder a la inconformidad de la población por la toma militar y el agravamiento de la situación económica por el control inicial al comercio de coca, el gobierno nacional y el gobierno departamental diseñan con carácter de urgencia un “Plan de Acción Inmediata por Desarrollar en el Medio y el Bajo Caguán”, con la activa participación del Incora, el ICBF, el Idema, el ICA, la Caja Agraria, el SENA y el Servicio Seccional de Salud. Como es apenas obvio, este plan está orientado a corto plazo a abrir un espacio de opinión a la presencia armada y modificar, a mediano plazo, las condiciones políticas de la zona (Jaramillo, Mora y Cubides: 1986, p. 221).

El Plan de Acción Inmediata constituye una de las primeras experiencias regionales del desarrollo alternativo, que supone unas nuevas reglas del juego entre el Estado y

las comunidades que en zonas de colonización se encuentran afectadas por el conflicto armado y el fenómeno de los cultivos de uso ilícito.

d. El Desarrollo Alternativo

En una de sus definiciones más comunes, el desarrollo alternativo se concibe como una política complementaria a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Tal fue, a modo de ejemplo, la característica de esta estrategia en la experiencia de Colombia durante el período 1994-1998, o en el caso de Bolivia en el momento en que el gobierno decide una estricta erradicación manual forzosa entre 1998 y 1999, y que condujo en seguida a decisiones sobre alternativas económicas a productores que dependían de la hoja de coca (Vargas Mesa: 2005, p. 153).

Para la ejecución en Colombia de este tipo de iniciativas, se creó el Plante, Plan de Desarrollo Alternativo, programa presidencial “orientado a dar, a partir de la destrucción de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida, dentro de la ley, a los campesinos, colonos e indígenas involucrados en esta actividad” (Presidencia de la República: 1996).

Para la región del Medio y el Bajo Caguán⁵ existen antecedentes del desarrollo alternativo a partir de 1988, cuando el Incora ejecuta el Plan de Acción Inmediata, que consiste en otorgar crédito a los campesinos cocaleros, en ganadería, caucho y maíz. Después, se ejecuta en la zona el Plan de Desarrollo Alternativo, que ofrece ganadería, cría de cerdos, aves y el establecimiento de parcelas agroforestales con maderables.

Como balance de estas políticas públicas, se concluye el bajo impacto de las experiencias implementadas, teniendo en cuenta que se le ha dado respuesta inadecuada a las necesidades, las inquietudes y los intereses de la población. En general, se identifican inconsistencias, vacíos y limitaciones en el desarrollo integral de las propuestas alternativas a la coca en la zona.

De manera simultánea, la Iglesia católica regional acompaña a las comunidades desde su enfoque de la promoción humana, con la campaña animada desde 1988 por la parroquia de Remolino del Caguán: “Di no a la coca, sí al cacao y al caucho”; así como con el programa de formación orientado por la Fundación Cifisam: “Granja familiar amazónica” Grafam, que busca la diversificación del sistema productivo, la formación integral de las familias, el aprovechamiento de la oferta ambiental local y la transformación de otros productos, entre otros los cereales, el cacao y la caña de azúcar.

En términos generales, la ejecución de la política pública de desarrollo alternativo no incide en la estabilización y la recomposición de los procesos de colonización en

⁵ Véase Memorias del seminario-taller “Fumigaciones, desarrollo alternativo y crisis humanitaria: respuestas desde la comunidad del Bajo Caguán”. Remolino del Caguán, septiembre de 2002.

la zona; paradójicamente, por sus debilidades internas y otras condiciones regionales, podría haber producido consecuencias no deseadas, como la pérdida aún mayor de la legitimidad y la gobernabilidad del Estado, así como la activación de resistencias en las comunidades por efecto del incumplimiento frente a las expectativas generadas por tales intervenciones.

e. Lucha contra las drogas

Luego de haber librado a finales de los años ochenta una guerra contra los núcleos de narcotraficantes en distintas ciudades del país que incrementa los índices de violencia interna, en Colombia la política de lucha contra las drogas ha centrado sus esfuerzos en la disminución de la oferta, combinando varias modalidades de control, que incluyen, entre otras: la penalización de las actividades relacionadas con la producción, la transformación y la comercialización de sustancias prohibidas (ley 30); la interdicción terrestre, aérea y fluvial de drogas y precursores, la erradicación manual y forzosa, la destrucción de cultivos y laboratorios para la transformación, así como la fumigación aérea de las plantaciones.

La política de lucha contra las drogas coincide con los intereses de los EE. UU., que es comentado así por Vargas Mesa (2005, p. 9):

La apuesta por el énfasis de la focalización en el control de los cultivos ilícitos se da porque, según el Departamento de Estado, es allí donde se presenta la mejor relación costo-beneficio frente al uso de medios para cortar la oferta. Esto explica la continuidad del énfasis de las acciones en esa parte de la cadena. Se alegan costos muchos más altos y límites en los indicadores de éxito cuando el énfasis se pone en la parte del tráfico. El desarrollo de cálculos sobre el potencial productivo que sale del mercado al destruir los cultivos, no encuentra otro parangón en otras partes de la cadena del narcotráfico.

Tanto ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, políticos, analistas y otros sectores nacionales e internacionales, precisan que uno de los componentes más visibles y más discutidos de la estrategia lo constituye la fumigación aérea con glifosato; en particular en la concerniente a la relación entre las fumigaciones y las áreas disminuidas.

Frente a este debate, Vargas Mesa (2005, pp. 19-20) marca las nuevas características de los cultivos:

1. La atomización creciente que se refleja en la presencia de cultivos en 23 departamentos frente a sólo 12 que existían en 1999, en la antesala del Plan Colombia.
2. La conversión hacia modelos de pequeña finca de tres o menos hectáreas.
3. La mimetización en el sotobosque y siguiendo procesos de siembra dispersos más que grandes acumulados.

4. El aprovechamiento de siembras en parques naturales para el cumplimiento de la condición anterior, lo cual agrava la situación de las áreas protegidas por la tala de bosque en zonas frágiles, importantes en biodiversidad. Vale aclarar, sin embargo, que según los datos del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCA), ésta es una tendencia baja.

5. La inserción de los cultivos en zonas no marginales, sino en áreas más integradas a la nación y que son manejados con técnicas de asociación de cultivos, como en el caso de la zona cafetera, y que impide un conocimiento real de las áreas de cultivos de uso ilícito.

Recientemente, a partir de 2005 en la zona del Bajo y el Medio Caguán se agrega otro rasgo: la obtención de nuevas variedades de coca que contienen mayor cantidad porcentual de alcaloide en sus hojas y cuyos arbustos crecen bajo el sombrío de estratos vegetales más altos y frondosos, lo cual reduce la posibilidad de ser detectadas por las autoridades.

Otra arista de la discusión se concentra en los impactos que la aspersión aérea con glifosato tiene sobre las comunidades rurales, los ecosistemas estratégicos donde habitan y los sistemas productivos de los cuales derivan su subsistencia.

En tal sentido, como resultado de un ejercicio colectivo realizado en la zona del Bajo Caguán⁶, se precisa que las fumigaciones vienen desarrollándose en ese territorio desde 1995 y vienen produciendo los siguientes efectos:

1. Desempleo, el cual se acentúa en los trabajadores temporales, los pequeños y medianos productores y los comerciantes.

2. Disminución de la rentabilidad económica. No pueden percibirse los mismos ingresos, debido al incremento en los costos de producción de la coca. Los campesinos se ven obligados a realizar otras actividades que complementen su subsistencia.

3. Afectación de la salud humana, pues generan intoxicaciones y desplazamiento forzoso. De igual manera, ha afectado los animales domésticos.

4. Problemas sociales: a pesar de que la población está dispuesta al cambio, las fumigaciones producen inestabilidad en la región y, por tanto, el gobierno nacional pierde legitimidad ante las comunidades. De igual forma, acaba con las aspiraciones del campesino. El productor se queda sin el sustento de la familia. Los estudiantes deben retirarse de los centros educativos porque se carece entonces del dinero para sostenerlos.

5. Algunos niños, niñas y jóvenes optan por ser parte de la insurgencia o de la delincuencia común, agravando los casos de violencia.

6. Estancamiento de los grupos agrícolas que tienen proyecciones económicas para la región.

7. Por ser una zona de acceso difícil, se ha convertido en cuello de botella para la consecución de los productos básicos.

⁶ Ibíd. Memorias del seminario-Taller. 2002.

*f. Plan Colombia*⁷

Recientemente, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango (2000-2003), con las expectativas que genera su política de paz, se implementa el Plan Colombia como una estrategia orientada hacia el fortalecimiento del Estado central y en las regiones, así como a establecer incentivos para que los campesinos y los indígenas reconviertan sus sistemas agrícolas basados en la producción de cultivos de uso ilícito.

La administración actual, en su propuesta de consolidar un Estado comunitario, viene implementando la política de seguridad democrática, cuyo enfoque articula estrategias antiterroristas y de lucha contra las drogas, involucrando cada vez más a la población civil en actividades policivas y militares.

Esta asociación es referenciada por Vargas Mesa (2005, pp. 23-24) así:

Aunque el tratamiento de las drogas como un problema de seguridad aparece hacia el final del conflicto Este-Oeste, es en la posguerra fría que se posiciona como tal, y hoy evoluciona hacia un escenario que ha terminado articulándolos como parte de la lucha antiterrorista. A su vez, el tratamiento del terrorismo con el uso de los sistemas de guerra que contienen un fuerte componente militar convencional dirigido a golpear las supuestas retaguardias territoriales, ha terminado por dar un impulso a la remilitarización de la guerra contra las drogas. No obstante, crece el cuestionamiento a las características planas de esta compleja problemática.

Para la Amazonia y el sur del país la política de seguridad democrática se traduce en la implementación de varias estrategias: cero tolerancia con los cultivos de uso ilícito; violencia política y terrorismo son idénticos, por tanto, hay que dar mayores facultades judiciales a la fuerza pública; y a través del Plan Patriota cambiar el equilibrio de la guerra contra las FARC.

Como respuesta militar al Plan Patriota, los grupos ilegales al margen de la ley vienen endureciendo sus sistemas de control social hacia la población civil. Por ejemplo, reúnen a las comunidades rurales de la región y las presionan para que tomen partido a su favor con la amenaza de destierro o muerte para los quienes no asuman sus orientaciones.

Así mismo, en especial las FARC, han retomado las amenazas contra las autoridades locales (alcaldes, concejales y funcionarios municipales) como una forma de debilitar la gobernabilidad. Además, en algunos casos, están prohibiendo a las comunidades recibir las pocas ayudas que ofrece el Estado, obligando a los pobladores, cuya economía está en crisis, a asumir costos adicionales por los servicios sociales básicos.

⁷ Parte de las reflexiones incluidas aquí, se encuentran en Vicariato Apostólico San Vicente-Puerto Leguízamo (2004).

En relación con algunos impactos del Plan Colombia, Vargas concluye:

El ámbito de confluencia de los propósitos del Plan Colombia dominado por Washington y la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez apuntan con claridad a golpear a las guerrillas, bajo el reconocimiento común de la simbiosis entre drogas y financiación de los “terroristas”.

Otro efecto colateral de la actual estrategia que enmarca las drogas como parte de la lucha antiterrorista, es una peligrosa disminución del reconocimiento a las causas sociales y económicas del problema. Así mismo, en esa misma dirección, el desarrollo alternativo ha pasado a articularse a la lucha antiterrorista en el plan estratégico del Departamento de Estado de los EE. UU. y la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los grandes costos sociales, ambientales y económicos por la implementación de esta estrategia son responsabilidad del gobierno de los EE. UU. y del gobierno colombiano. Por su parte, los efectos a esos mismos niveles por la articulación de esta economía con la guerra son de responsabilidad de los grupos armados. Cada uno maneja su libreto, y en medio de todos ellos están las comunidades. Éstas por lo general son invisibles, y sobre ellas recaen los efectos de las acciones de los diferentes actores, y se agravan la crisis humanitaria con el fenómeno del desplazamiento forzoso, la pérdida de su seguridad alimentaria por las fumigaciones, el debilitamiento de la organización por la guerra y, en general, obstaculizando aún más la perspectiva de futuro de sus integrantes (Vargas Mesa: 2005, p. 125).

6. Conclusiones provisionales

Ya sea por el control de la mano de obra aborígen, la extracción y la comercialización de materias primas, la apropiación de tierras, la intermitente presencia del Estado, el control territorial de grupos armados, la consolidación de redes para actividades ilícitas, el aseguramiento de corredores estratégicos, entre otras razones, el conflicto y sus diversas manifestaciones hacen parte de un fenómeno que viene acompañando construcción espacial, social e histórica de la región analizada.

Pueden aportar elementos de interés para el estudio de la colonización en zonas de conflicto, la identificación de los ciclos de vinculación internos: en los ámbitos locales –migración intrarregional–, con los ámbitos nacionales –reformas aplazadas y desplaza-

mientos—; con los ciclos de enlace internacionales: extractivismo, desarrollo alternativo, lucha contra las drogas, guerra antiterrorista.

Los estudios centrados en el referente Estado, que de modo tradicional estiman la presencia débil, la ausencia y la inexistencia, o la disolución de su presencia en las regiones podrían complementarse con miradas en las cuales se precise la evolución de las políticas públicas, los impactos de su aplicación y las interrelaciones de éstas con estrategias de orden global.

Si bien en la perspectiva del conflicto el territorio viene siendo reflexionado desde afuera como un medio y un fin para los actores en confrontación, valdría la pena también analizar sus dinámicas a partir de las percepciones, los significados y los sentidos que adquiere desde adentro, es decir, a partir de los imaginarios colectivos que recrean sus habitantes.

En ocasiones el horizonte simbólico que se elabora sobre una región desconoce el complejo proceso de construcción de las intersubjetividades que allí ocurren. Así, los rótulos y los roles levantados de modo artificial pueden terminar convirtiéndose en verdaderos estigmas, cuyas denominaciones se inscriben en la geografía verbal de la guerra.

El análisis y la comprensión de fenómenos socioespaciales, como la expansión de la frontera agrícola, no se agota en la identificación de unos actores sociales en un marco conocido de lugares y caminos posibles de espacio-tiempo. Supondría reconstruir las diversas relaciones que allí se operan articuladas a las conformaciones sociales que se rehacen y se configuran.

Referencias bibliográficas

ARTUNDUAGA BERMEJO, Félix (1984). Historia general del Caquetá. En: González Arias, J. J. *Amazonia colombiana, espacio y sociedad*. Bogotá: Cinep.

GONZÁLEZ ARIAS, José Jairo (1988). *Amazonia Colombiana; espacio y sociedad*, Bogotá: CINEP.

JARAMILLO, Jaime, MORA, Leonidas y CUBIDES, Fernando (1986). *Colonización, coca y guerrilla*. Bogotá: Alianza Editorial.

LÓPEZ BÁEZ, Camilo (2004). Algunas transformaciones sociales originadas a partir de la generalización de los cultivos de uso ilícito en la zona del Medio y Bajo Caguán. En: Revista *Arraigo*, No. 5. San Vicente del Caguán.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (1996). Programa Plante. Bogotá.

OSLENDER, Ulrich (2002). Espacio, lugar y movimientos sociales. Hacia una espacialidad de resistencia. En *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, Vol. VI, No. 115. Barcelona.

RAMÍREZ MONTENEGRO, Roberto (1994). Procesos recientes de guerra y paz en la Amazonia colombiana. En. *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

RAMÍREZ TOBÓN, William (1981). *La guerrilla rural: ¿una vía hacia la colonización armada?* Bogotá: Clacso.

VARGAS MESA, Ricardo (2005). *Narcotráfico, guerra y política antidrogas. Una perspectiva sobre las drogas en el conflicto armado colombiano*. Acción Andina, Novic, TNI.

VICARIATO APOSTÓLICO SAN VICENTE-PUERTO LEGUÍZAMO (2004). *Hacia una comprensión del conflicto armado en la Amazonia colombiana*. San Vicente del Caguán.

